



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.**

---

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019)

<b>RADICACIÓN:</b>	<b>11001-33-35-026-2018-00262-00</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>MYRIAM BETTY RAMOS PEÑA</b>
<b>DEMANDADA:</b>	<b>NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</b>

A través de memorial obrante a folios 105 a 108, el apoderado judicial de la parte actora, interpuso y sustentó recurso de reposición contra el auto proferido por este Despacho el 11 de marzo de 2019, en virtud del cual se inadmitió la demanda (fls. 102-103).

Conforme a lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, con el objeto de determinar la concesión del mismo, de acuerdo con las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

**i. Del recurso de reposición**

En primer lugar, frente al recurso de reposición, se observa que el art. 242 del C.P.A.C.A., establece lo siguiente:

***“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN.*** *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

*En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”*

Visto lo anterior, es claro que el recurso de reposición solo procede contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación, tal como ocurre en el presente asunto.

Así pues, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A., es preciso manifestar que en tratándose del recurso de reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

**“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES.** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

*El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.  
(...)”*

**“ARTÍCULO 319. TRÁMITE.** *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

*Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”*

Subraya fuera de texto

En este orden de ideas, como la diligencia de notificación del auto objeto de recurso, se surtió en estado del día 12 de marzo de 2019, y al haberse presentado el recurso de reposición dentro del término legal, esto es, el 15 siguiente, el Despacho encuentra que el mismo es procedente y por consiguiente, es viable resolverlo.

Pues bien, el motivo de inconformidad de la apoderada con el auto que dispuso a inadmitir la demanda, radica en lo siguiente:

*“En cuanto a los actos administrativos demandando, esta parte reitera los solicitados en el libelo de demanda, consecuentemente considera que las pretensiones PRIMERA y TERCERA están ajustado a derecho, esto lo sustento en el entendido que en el oficio S-2’18-1537 del 25 de enero de 2018, el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO no debió remitir la petición a la FIDUPREVISORA S.A., ya que no tiene fundamento legal para no contestar de fondo la petición, ya que por mandato de la ley 91 de 1989, es la entidad competente para tramitar las petición encaminadas al reconocimiento de prestaciones sociales del Magisterio oficial así como las encaminadas al reconocimiento de prestaciones sociales, así para el caso, esta entidad debió atender y responder de fondo por lo menos en lo que refiere a la mora en la expedición del acto administrativo que reconoció las Cesantías de la demandante ( ya que delegó esta función en virtud del artículo 56 de la ley 962 de 2005 a las secretarías de educación del ente territorial al que está vinculado el Docente), y no comparte el argumento porque le remite a la Fiduprevisora S.A. al q señalar que esta es la entidad pagadora, sin tener en cuenta que esta*

entidad paga pero en virtud de la orden impartida por decisión de la administración contenida en un Acto Administrativo que ordena este pago.  
(...)

En igual sentido, frente a la petición elevada a la Fiduciaria la previsora S.A. con petición 20180320109752 de fecha 17 de enero de 2018, la entidad informa a través del oficio' de trámite No. 20181070028751 de fecha lunes 29 de Enero de 2018 que la petición: "(...) fue remitida a la Dirección de Prestaciones Económicas para la Revisión y posterior liquidación en caso de proceder la sanción por mora", es decir, de la lectura de este oficio es claro que fue remitida la petición para adelantar su estudio a un área dentro de esa entidad, por lo que no estamos frente a una respuesta de fondo de la petición que solicitó el reconocimiento de la Sanción moratoria, solamente está informando a que área fue remitida para su trámite, por lo que pasado el término de los tres (3) meses sin tener respuesta de fondo a esta petición en virtud del artículo 86 se ha configurado el acto ficto."

Ahora bien, frente al silencio administrativo, la Ley 1437 de 2011, en su artículo establece:

**"Artículo 83. Silencio negativo.** Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.  
(...)"

De la transcripción del precitado artículo se desprende que cuando transcurre un determinado tiempo y la Administración no manifiesta su voluntad respecto de una solicitud en particular, se presume la existencia de un acto ficto que contiene una decisión desfavorable a las pretensiones del peticionario.<sup>1</sup>

En el presente caso objeto de estudio, resalta el Despacho, que si bien puede considerarse que la Secretaría de Educación de Distrital no se pronunció de fondo frente a la petición incoada por el actor, esta última, mediante **de oficio No. 2018-15037, oficio del 25 de enero de 2018**, emitió respuesta en la que informó que "los tiempos poseen variación respecto al volumen de solicitudes radicadas en la Secretaría y al cumplimiento de los requisitos para cada prestación". Aunado a ello, dentro del mismo oficio, decidió remitir por competencia la solicitud a la Fiduprevisora S.A.

Ahora bien, frente a la petición radicada ante la Fiduprevisora S.A., como particular en ejercicio de funciones administrativas, ésta última avocó conocimiento, se pronunció y dio respuesta a la petición mediante oficio **No. 2018-28751 (fl. 43)**. Y si bien, tampoco se pronunció de fondo, sí indicó que la petición fue remitida a la Dirección de Prestaciones Económicas "para la revisión y posterior liquidación en caso de ser procedente la Sanción por Mora". Lo anterior permite que, la respuesta emitida por la Fiduprevisora S.A., **se convierta en un pronunciamiento de la administración, y por tanto, en un acto administrativo que contiene la voluntad de la administración.**

---

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN SEGUNDA. Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00632-01(2436-14)

Reitera el Despacho, que el Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, en providencia dictada el 23 de marzo de 2017, dentro del expediente 2014-00144, estableció que “el silencio administrativo es una figura garantista que busca que la administración pública resuelva las peticiones que en interés particular formulen los ciudadanos dentro de los términos previstos en la ley, en orden a garantizar el derecho constitucional fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra Carta Magna, y en caso de que se deje vencer dicho plazo sin la notificación de una decisión expresa, darle al peticionario la oportunidad de acudir ante el juez si el silencio de la administración tiene efectos negativos, o de obtener lo solicitado, si ese silencio tiene efectos positivos”.

Así mismo, la Alta Corporación en auto adiado 21 de abril de 2016 de la Sección Segunda, proferido por el H. C.P. Dr. ENRIQUE DE JESÚS ARZUZA MOLINARES, dentro del expediente 2013-00632, advirtió:

**“1.- Actos producto del silencio administrativo negativo.**

*En el presente caso se observa que el derecho de petición fue interpuesto el 29 de junio de 2011, por lo cual, las reglas de procedimiento para determinar si se produjo el silencio administrativo negativo son las previstas en el Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 308 del CPACA.*

*Definido lo anterior, se tiene que el silencio administrativo constituye para la Administración “...el deber de pronunciarse sobre las cuestiones que se le plantean...”; y para el administrado, el “...mecanismo de sanción morosa...” que le garantiza el ejercicio del derecho constitucional de petición y el acceso a la administración de justicia.*

*En el régimen jurídico colombiano el silencio administrativo puede ser positivo o negativo, siendo este último la regla general, que nace como una ficción de carácter legal y ha sido definida en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:*

*“Silencio negativo. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.*

*(...)*

***De la transcripción se desprende que cuando transcurre un determinado tiempo y la Administración no manifiesta su voluntad respecto de una solicitud en particular, de forma definitiva, se presume la existencia de un acto ficto que contiene una decisión desfavorable a las pretensiones del peticionario.***

*Dicha decisión tiene inmersa una facultad en cabeza del administrado de i) esperar a que la administración algún día se pronuncie, ii) hacer uso de los recursos en contra del acto ficto, o iii) formular a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la demanda en contra del acto presunto.*

*Visto lo anterior, se concluye que el silencio administrativo negativo es una garantía consustancial al debido proceso que debe prevalecer en toda actuación administrativa y que se erige en favor del administrado cuando la administración no emite respuesta de fondo a una petición; **por tanto, la única forma de impedir su ocurrencia es que se emita una respuesta definitiva***

**forma de impedir su ocurrencia es que se emita una respuesta definitiva a lo solicitado y/o se remita la petición recibida por una autoridad incompetente, al funcionario o entidad que se considera es la facultada para resolverla.** (Negrita del despacho)

Así las cosas, no puede considerarse que cuando existe manifestación alguna por parte de la administración, como es la de la Secretaría Distrital de Educación, o la de la Fiduciaria La Previsora S.A., aún así se pueda configurar el silencio administrativo dando lugar a la potencial declaratoria de la existencia del “acto ficto o presunto”, pues estos actos y situaciones administrativas son excluyente entre sí. Lo anterior en razón a que al existir un acto o manifestación en concreto, **independientemente de su contenido, u objeto, en esta se expresa la voluntad de la administración, imposibilitando así la configuración del silencio administrativo.**

Concluye el Despacho que no puede predicarse la ocurrencia del silencio administrativo en los términos del artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, cuando **“se remita la petición recibida”**, toda vez que, al remitirse la solicitud a la autoridad que se considere competente, es ésta quien tiene la obligación de expedir el acto administrativo definitivo resolviendo el fondo del asunto. Y solo en el evento que esta última entidad guarde silencio sobre el asunto, es que se podrá configurar la figura del silencio administrativo.

Por lo anteriormente señalado, y en congruencia con el auto del 11 de marzo de 2019, que dispuso inadmitir la demanda, este Despacho considera que no le asiste razón a la recurrente. Por tanto, **no concederá el recurso incoado por la apoderada judicial de la parte actora, y en consecuencia, no repondrá el auto del 11 de marzo de 2019, que dispuso inadmitir la demanda.**

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- NEGAR** el recurso de reposición interpuesto contra el auto que inadmitió la demanda, de conformidad con los señalamientos esbozados en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO.-** Dese cumplimiento a lo establecido en la parte resolutive del auto del 11 de marzo de 2019, que dispuso inadmitir la demanda presentada por el actor.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
Juez



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **9 DE ABRIL DE 2019**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA**  
**SECRETARIA**